

COLOMBIA: MÁS MUERTES VIOLENTAS, SIN CONTAR LAS DE LA GUERRA

El costo social de las armas

En la última revisión mundial de la Declaración de Ginebra sobre Violencia armada y Desarrollo, Colombia asistió como observador, pero no se sumó a los más de 90 países comprometidos con la disminución de índices de violencia armada, a pesar de ocupar uno de los primeros lugares en homicidios y muertes.

Paola Vernot

Camila no entiende por qué un hombre que no es policía lleva un arma. Mucho menos por qué le disparó a otro, al creer que este quería robarle su carro. Pero lo que menos entiende esta niña bogotana de 11 años, es que un objeto pueda llegar a ser, a los ojos de alguien, más importante que una vida humana. "Un carro es una cosa que se puede reemplazar", asegura Camila, "la vida de una persona, no".

Muertes abisondas como la del profesor Diego Echeverry, ocurrida en el sector de Chapinero de Bogotá el pasado 24 de agosto, no deberían ocurrir. Pero ocurren más a menudo de lo que se piensa. Un promedio de 3,6 personas pierden la vida cada día en Bogotá, ciudad que se sitúa, pese a todo, en una tasa anual de homicidio de 18,1 por cada 100 mil habitantes, por debajo de Medellín (30) y de Cali (67), siendo esta última la más afectada del país.

Un estudio dado a conocer hace un par de semanas, en el cual participaron varios centros de investigación independientes del mundo, contradice los resultados de la Seguridad Democrática, que presentan los medios de comunicación colombianos. Mientras el analista Alfredo Rangel amonició en su columna de la Revista Semana, fechada del 13 de septiembre, que "casi sin darnos cuenta, Colombia ha empezado a ser un país más seguro que los del vecindario", el estudio de The Global Burden of Armed Violence, dado a conocer en Ginebra, Suiza, este mismo mes de septiembre, sitúa a Colombia entre los países con los índices más altos de muerte violenta en el mundo, sin contar las víctimas de la guerra. El estudio incluye a Colombia en otra lista: la de países con el nivel más alto de muertes ocasionales, estas sí, directamente por el conflicto armado, al lado de Irak, Sudán, Afganistán y República Democrática del Congo.

Según Katherine Aguirre, investi-

gadora del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, el cual participó por Colombia en este informe mundial, Colombia ha reducido significativamente su tasa de homicidio, como consecuencia de las campañas de desarme y desmovilización, pero sigue alcanzando niveles preocupantes de violencia armada.

Aunque existen unas metas del milenio que Colombia se comprometió a cumplir, para reducir aspectos como la pobreza, esas metas no incluyen la reducción de la violencia. Por ello, hace dos años 94 países—entre los cuales no se encuentran EE.UU. ni Colombia, a pesar de ser dos de los más afectados por este flagelo—se reunieron y lanzaron la Declaración de Ginebra, con el fin de promover la reducción de la violencia por arma de fuego.

Aunque el informe presentado en Ginebra, el 12 de septiembre, no presenta un capítulo dedicado exclusivamente al caso colombiano, se puede encontrar el nombre de nuestro país en cada uno de sus capítulos: conflicto armado, muerte en situación de postconflicto, homicidio, violencia de género con homicidio, desapariciones forzadas, secuestros extorsivos y asesinatos extrajudiciales.

El negocio de las armas

Según el investigador en delincuencia y conflicto urbano, Henry Benavides, "en países que presentan aspectos de ingobernabilidad, como es el caso de Colombia y de varios países de América Latina y de África, se está dando el gran tráfico de armas livianas en el mundo".

En el caso colombiano, la situación de las armas es particular. Según Aguirre, "Colombia tiene uno de los registros más estrictos con respecto al control de armas de fuego. La Constitución Nacional establece que solo el Estado puede comercializarlas y producir las. Indumil produce armas y las vende, y el Departamento de Control de Comercio



Los principales protagonistas de la violencia armada son hombres menores de 30 años.

Foto/Archivo POLO

de Armas y Explosivos emite los permisos de porte y tenencia".

Hay una normativa en el papel relativamente estricta, asegura Aguirre, "las personas tienen que pagar unos permisos y unas armas a un costo alto. Pero al lado de eso hay un mercado negro de armas de fuego bastante importante. Estas armas no entran al país por una ruta fija, hay todas las rutas que uno se pueda imaginar. Sabemos que han llegado armas de Jordania y de Ecuador. Después del proceso de desarme y desmovilización de algunos países centroamericanos, quedó un flujo de armas bastante importante que aterrizó aquí".

Benavides advierte sobre la forma en que se maneja este "negocio": "En Colombia nunca se hace público el detalle de la venta de armas legales por parte del Estado, como ocurre en otros países, donde es totalmente transparente. Cuando Luis Eduardo Garzón propuso que los civiles, por medio de los alcaldes, sometieran a control la venta de armas en las ciudades, hubo mucho malestar entre quienes controlan ese mercado".

Para Jairo Vargas, responsable local de la Red de Reconciliación, Paz y Convivencia de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, "en el país la mayoría de armas que se usan no son legales. El tema de las armas ilegales está asociado con los grupos armados, con el narcotráfico, con la limpieza social. Regular ese negocio es la cuestión central, si se quiere reducir realmente los índices de violencia armada".

Intereses que impiden el desarme

"La ciudadanía tiene que empezar a hacer vedurías sobre la venta y tráfico de armas en el país, porque es uno

de los problemas más graves que tenemos", afirma Benavides. Según este investigador, "eso es lo que va a garantizar un proceso de transparencia y de construcción democrática frente al tema del comercio y tráfico de armas".

Jairo Vargas agrega, en este mismo sentido, que "hay una cantidad de intereses en el ámbito nacional e internacional que impide que se pueda controlar el tema de las armas".

Mientras Indumil se sitúa entre las empresas con mejores resultados financieros del país, algunos alcaldes del país lanzaron la campaña "realímate por el desarme", la cual logró recoger más de un millón 700 mil firmas para apoyar al referendo que busca facultar a los alcaldes municipales y distritales para restringir el porte y tenencia de armas de fuego, aumentar la edad de porte y tenencia e instaurar la obligatoriedad de un seguro de accidentes, cuando se obtiene un arma.

Vargas explica lo que pasó con el referendo que se encuentra en un punto muerto desde el año pasado: "Un grupo de congresistas nos expresó la decisión del señor Ministro de Defensa de que ese proyecto no se tramitara, porque desde su perspectiva el porte y tenencia de armas sólo podía y debía ser regulado por el Ejército". Sin embargo, sus promotores buscarán que este proyecto sea discutido en el segundo periodo legislativo del año en curso, para que sea respaldada la voluntad de más de medio millón y medio de colombianos para lograr el desarme.

Este 26 de septiembre, Bogotá será declarada Territorio de Paz, programa que busca crear en todas las localidades una nueva cultura de desmovilización y desarme, que desarticule en el imaginario social el uso de las armas.

Precio de la violencia

“S”eis mil millones de dólares le cuestan a Colombia los homicidios, cada año”, asegura Katherine Aguirre. Esto es lo que el país deja de producir porque son asesinados jóvenes en edad productiva. El estudio citado muestra cómo la violencia armada estorpea “el desarrollo humano, social y económico, al tiempo que erosiona el capital social de las comunidades”.

Desarme y paz, con justicia social

“E”n la época en que hubo la gran matanza de jóvenes en la localidad, salimos a retomar en las noches los sitios en donde los actores armados decataban toque de queda, salimos a hacer arte y cultura, invitamos a la gente para que no nos quitaran los espacios públicos, también pintamos en toda la localidad frases que decían: "para que la vida siga siendo joven, Ciudad Bolívar, Territorio de Paz" y la gente empezó a apropiarse de ese eslogan. Para nosotros se trata de llegar a la localidad con una propuesta integral. Que no haya guerra, que no haya violencia, armas ni armados. Con las actas que hacemos en los colegios, buscamos que toda la comunidad se articule en torno a los jóvenes, para alcanzar la paz, pero una paz con justicia social", Jairo Vargas, Red de Reconciliación, Paz y Convivencia de la Secretaría de Gobierno de Bogotá.